

Señor:
JUEZ ADMINISTRATIVO (REPARTO)
GUADALAJARA DE BUGA.
E. S. D.

REFERENCIA: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.

DEMANDADA: GERENTE NACIONAL DE RECONOCIMIENTO DE PENSIONES DE COLPENSIONES; VICEPRESIDENTE DE BENEFICIOS Y PRESTACIONES, Y GERENTE NACIONAL DE RECONOCIMIENTO.

DEMANDANTE: JAIRO HERNEY ARANA SAAVEDRA.

JAIRO HERNEY ARANA SAAVEDRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.875.487 de Buga, portador de la Tarjeta Profesional de Abogado No. 39.869 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en mi propio nombre y representación, con todo respeto manifiesto a usted que interpongo **ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE CARÁCTER LABORAL**, consagrada en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contra la **GERENTE NACIONAL DE RECONOCIMIENTO DE PENSIONES, COLPENSIONES**, representada por la señora **ZULMA CONSTANZA GUAUQUE BECERRA; PAULA MARCELA CARDONA RUIZ, VICEPRESIDENTE DE BENEFICIOS Y PRESTACIONES; LUIS FERNANDO UCRÓS VELASQUEZ, GERENTE NACIONAL DE RECONOCIMIENTO** y/o contra quien haga sus veces, con la intervención del Ministerio Público.

H E C H O S:

1.- El suscrito, al haber cumplido con el tiempo y la edad requeridos solicité a COLPENSIONES, mi pensión de jubilación por vejez, la cual le fue negada por medio de la resolución No GNR-203121 del 05 de junio de 2014, indicándose que no tenía el tiempo de servicio completo para acceder a tal prestación, ya que me faltaba el período comprendido entre el, 1º. de septiembre de 1985 hasta el 09 de marzo de 1988, a pesar de que en mi historia laboral, el servicio a la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, fue sin solución de continuidad, tal como reposa e los certificados correspondientes.

2.- En escrito presentado el 17 de junio de 2014, interpose recurso de reposición y en subsidio el de apelación, a efectos de la revocatoria del citado acto administrativo y en su defecto se reconociera la prestación económica de pensión por vejez, conforme al Decreto 546 de 1971, al haber acreditado más de 20 años de servicio a la Rama Judicial del Poder Público y 55 años de edad. Así fue que expidieron la Resolución Nro. GNR-268544 del 25 de julio de 2014, con la cual se confirma en todas sus partes al acto

administrativo atacado. Sistemáticamente COLPENSIONES insiste en desconocerme el tiempo de servicios prestado en el Juzgado 18 de Instrucción Criminal ambulante de Santiago de Cali, es decir, el período comprendido entre el 1º. de septiembre de 1985 y el 07 de marzo de 1988, lo que equivale a dos (2) años, SEIS (6) MESES Y seis (6) DÍAS, a pesar de que aparece en el respectivo certificado de sueldos y descuentos. Sin esa omisión tan grande, se reflejaría ciertamente todo el tiempo acumulado de servicios, es decir, **VEINTIUN AÑOS, UN MES Y VEINTISEIS DIAS**. En esta misma Resolución se indica que deben de tenerse en cuenta todos los tiempos certificados independientemente si respecto de los mismos se efectuaron o no los aportes a una caja pública o fondo territorial, ya que la responsabilidad la asume el empleador que certifica. Este Acto Administrativo sostiene que en cuanto al tiempo laborado en el Juzgado 18 de Instrucción Criminal en dicho período, se debe de tener en cuenta el formato Nro. 1 de información laboral, certificación de períodos de vinculación para pensiones y bonos pensionales, pero esto no se certificó. Y que al no encontrarse los tiempos correspondientes al período aludido, no es posible tenerlos en cuenta. Sobre este tópico en particular, la Honorable Corte Constitucional, mediante Sentencia T-550 de 2014, sostiene que esa omisión no se le debe de capitalizar al empleado, sino al empleador en un cien por ciento.

3.- Fue así como la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** -, emite la Resolución No. VPB-16710 DE 24 DE FEBRERO DE 2015, donde REVOCA en todas sus partes la Resolución Nro. GNR-203121 del 05 de julio de 2014, reconociendo mi pensión por vejez, pero a partir de que cumplí los sesenta (60) años de edad, es decir, a partir del 16 de noviembre de 2014, ya que insiste COLPENSIONES, adrede, en desconocer mis servicios en el Juzgado 18 de Instrucción Criminal de Cali. Sigue esa entidad ignorando el Decreto ley 546 de 1971, aplicable en mi caso en particular. Fuera de que se desprecia mi tiempo en el juzgado ya mencionado, en esta Resolución va más allá e IGNORA todo el tiempo prestado a la Fiscalía General De La Nación en el período comprendido entre el 1º. de julio de 1992 y el 30 de octubre de 1994. Aquí sí incluyó mis servicios en la Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga. .

4.- Mediante escrito radicado bajo partida Nro. 2015-4499947 del 20 de mayo de 2015, pedí a COLPENSIONES RELIQUIDAR mi pensión, tomando en cuenta la fecha cuando cumplí los 55 años de edad, amparado en el Decreto 546 de 1971, pero como siempre, no tuvo eco mi pedimento, otra vez, denegando la justicia que me asiste. Mediante Resolución Nro. GNR-54415, mediante la cual se ordena RELIQUIDAR mi pensión, por algunos centavos, no incluyó además el tiempo de servicios prestado en la Fiscalía General de la Nación entre el 01 de julio de 1992 y el 30 de octubre de 1994, a pesar de estar el certificado en manos de COLPENSIONES. Vuelve y juega, no tuvo en cuenta de nuevo lo del Juzgado 18 de Instrucción Criminal, aunque sí se incluyeron mis servicios en la Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga. En el caso de esta Resolución no tengo ningún reparo que hacer en lo concerniente al monto de mi pensión, ya que en esta oportunidad se tuvo en cuenta mi último sueldo devengado como empleado público, en cuantía de \$2.138.098,00, que es el principio constitucional de la CONDICIÓN MAS

BENEFICIOSA para mis aspiraciones, **pero debe de tenerse en cuenta la fecha retro-activa del 16 de noviembre de 2009, cuando cumplí los 55 años de edad**, incrementándose anualmente con base en el I.P.C., además de los intereses causados, ya que se han demorado mas de un año en liquidar mi pensión por vejez.

5.- Mediante escrito del 24 de febrero de 2016, radicado bajo el Nro. 2016-1853220-2, impugné la última decisión administrativa, vale decir, la GNR-54415 de febrero 19 de 2016, e interpose el recuro de reposición y en subsidio el de apelación, por las razones que a lo largo de este tedioso episodio y tan largo viaje jurídico siempre he esgrimido. Es que no entiendo por qué razón COLPENSIONES niega un derecho que está de bulto en los certificados expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura y Fiscalía General de la Nación, **cuyos originales reposan en esa Administradora de Pensiones**. Nótese que en este Acto Administrativo, a folio 5, en el cuadro respectivo, por enésima vez, no incluyeron el, período comprendido **entre el 1º. de septiembre de 1985 y el 07 de marzo de 1988. Tampoco el tiempo transcurrido entre el 1º. de julio de 1992 y el 30 de octubre de 1994, servido en el Fiscalía General de la Nación. Yo me pregunto, esto lo hacen con conocimiento de causa, en forma sistemática y adrede?**

6.- Mediante Resolución Nro. GNR-128627 del 29 de abril de 2016, COLPENSIONES NO REVOCÓ el acto administrativo objeto de reposición y concedió el recurso de apelación para el superior inmediato. En esta resolución **YA** tuvieron en cuenta el tiempo laborado en el Juzgado 18 de Instrucción Criminal de Cali, pero con todo el cinismo que siempre los ha acompañado a todos los funcionarios de esa Administradora de Pensiones, a sabiendas y con todo el dolo del mundo, adrede, si se puede decir, y de manera sistemática, como queriendo meterle un palo a la rueda de mis pretensiones mas que justas, **NO TUVIERON EN CUENTA el período comprendido entre el 01 de julio de 1992 y el 30 de octubre de 1994**, al servicio de la Fiscalía General de la Nación, **pero sí el tiempo al servicio de la Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga.**, Que ignominia. Como quien dice, hay que darle por cualquier medio en la cabeza a este señor tan cansón

7.- Mediante Resolución Nro. VPB-28111 de 06 de julio de 2016, se desató el recurso de alzada, y como era de esperarse, fue CONFIRMADA la Resolución Nro. GNR-54415 del 19 de febrero del mismo año, agotándose así la vía gubernativa.

8.- Los Certificados de Información Laboral, tanto del Consejo Superior de la Judicatura, como de la Fiscalía General de la Nación y de la Alcaldía municipal de Guadalajara de Buga, reposan en COLPENSIONES desde el instante cuando solicité el reconocimiento y pago de mi pensión de vejez.

PETICIONES:

1.- Se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en las resoluciones Nos.: 1.- **GNR 203121 del 05 de JUNIO de 2014**, por la cual se me niega la pensión de vejez; 2.- **GNR 268544 del 25 de JULIO de 2014** por la cual se resuelve un recurso de reposición en contra de la Resolución GNR-203121 del 05 de junio de 2014 confirmando; 3.- **VPB 16710 del 24 de FEBRERO de 2015** que resuelve un recurso de apelación en contra de la resolución GNR-203121 del 06 de JUNIO de 2014 en el sentido de confirmar el acto apelado. **Esta nulidad es en lo tocante a que mi pensión de vejez debe de reconocérseme desde el momento en que cumplí los 55 años de edad, no los 60 como así se decidió.** 4.- Resolución Nro. GNR-54415 de 19 de febrero 19 de 2016, en el sentido de que no se debe de **RELIQUIDAR MI PENSIÓN DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2014 SINO DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2009**. Así las cosas, el monto de la pensión de \$2.138.098,00 es el que percibiría desde el 16 de noviembre de 2009, incrementándose anualmente conforme lo indica la ley, con los ajustes necesarios. 5.- Resolución Nro. GNR-128627 DE 29 DE ABRIL DE 2016, mediante la cual se CONFIRMA la Resolución Nro. GNR-54415 DE 19 de febrero de 2016. 6.- RESOLUCIÓN NRO. **VPB-28111 DE 06 DE JULIO DE 2016**, con la cual confirma la Resolución Nro. GNR-54415 DE 19 DE FEBRERO DE 2016 y con la que se agotó la vía gubernativa.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, que el suscrito tiene derecho, a título de restablecimiento del derecho, a que **LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** -, me reconozca y pague mi pensión mensual de jubilación por vejez, en la suma dineraria que resulte de una correcta y justa liquidación de la misma, ajustada a los parámetros legales de los Decretos 546 de 1971, 717, 911, 1042, 1045 y 1660 de 1978, 691, art. 6º de 1994, modificado por el art. 1º del Decreto 1158 del mismo año y 247, art. 1º, inciso 2º de 1997, teniendo en cuenta para ello la remuneración mensual más alta devengada en el último año de servicio y los valores más altos de los demás emolumentos percibidos durante ese año, que igual constituyen factor salarial para efectos pensionales, en tratándose de los servidores de la Rama Judicial del Poder Público, los cuales son prima de servicios, la bonificación por servicios prestados y las doceavas partes de las primas de servicio, de navidad y de vacaciones. Este reconocimiento será **desde el 16 de noviembre de 2009, cuando cumplí los 55 años de edad, no desde el 16 de noviembre de 2014 cuando cumplí los 60.**

3.- **ORDENESE** que por el grupo de nómina de **LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** -, se liquiden las diferencias que resultaren de lo anteriormente reconocido y lo que se debe reconocer con los reajustes de ley producidos a partir de la fecha en que se produjo el retiro del servicio.

4.- ORDENESE que las sumas adeudadas al suscrito, se liquiden y cancelen con los correspondientes ajustes de valor monetario, a título de **INDEXACION**, conforme al índice de precios al consumidor certificados por el DANE, aplicando la fórmula legal respectiva mes por mes, toda vez que se trata de pagos sucesivos, **desde el 16 de noviembre de 2009**, hasta la fecha de inclusión en nómina de la obligación.

5.- DISPONGASE, en cuanto resulten procedentes por la naturaleza prestacional del asunto, las órdenes y condenas que de los hechos probados y del derecho aplicable puedan surgir en forma ultra o extra petita.

6.- CONDENESE en costas a la entidad demandada, conforme a las reglas dispuestas en el artículo 188 y ss. del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

7.- ORDENESE que la sentencia favorable se cumpla en los términos y condiciones de los artículos 189, 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO – NORMAS VIOLADAS – CONCEPTO DE VIOLACION.

Me fundamento en lo dispuesto por los artículos 137 y 164 numeral 1º literal c), del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Este último, dice así:

*“ART. 164.-**Oportunidad para presentar la demanda.** La demanda deberá ser presentada:*

1. En cualquier tiempo, cuando:

c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe”. (subrayado nuestro).

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES -, con la expedición de las resoluciones acusadas, actuando en consiente desconexión con el orden constitucional y legal, transgredió específicamente la siguiente normativa:

Artículos 6, 13, 23, 29, 48, 53 y 58 de la Constitución Nacional.

Artículos 1 y 6 del Decreto 546 de 1971, 12 del Decreto 717 de 1978, 4 del Decreto 911 de 1978, 45 a 48 del Decreto 1042 de 1978, 45 del Decreto 1045 de 1978, 132 y 133 del Decreto 1660 de 1978, 1, 2 literal A y 14 inciso primero de la Ley 4ª de 1992, 36 inciso segundo de la Ley 100 de 1993, 6 del Decreto 691 de 1994, modificado por el 1 del Decreto 1158 del mismo año, 1 de la Ley

332 de 1996 y 1 inciso segundo del Decreto 247 de 1997, Jurisprudencia sobre el particular y demás normas concordantes.

EL CONCEPTO DE LA VIOLACION

La preceptiva de orden constitucional citada se apunta violada dado que los constituyentes de 1991 construyeron un consenso de apertura hacia nuevos horizontes de convivencia y desarrollo con justicia social, concretado en el modelo constitucional que hoy, ya con muchos cambios rige los destinos nacionales, consiguiéndose como fruto invaluable de esa visión, la creación de una consciencia ciudadana que no existía sobre lo que son y representan los derechos y garantías mínimas fundamentales frente a nosotros mismos, frente a nuestros semejantes y frente a las instituciones legítimamente constituidas, para el fortalecimiento de una democracia real, sincera y operante en todos los niveles y momentos del diario acontecer.

Una constitución de todos y para todos era la consigna que debería regir entre quienes se encargaran de desarrollar, implementar y aplicar las leyes que la complementaran, meta sublime que muchas veces se hace inalcanzable de cara a las intenciones reprochables de muchos legisladores, que solo vislumbran sus intereses particulares, y a la actitud funcional de algunas autoridades públicas, cuando en forma caprichosa, arbitraria e injusta, incurren en francas vías de hecho por desconocimiento de la regulación legal o por aplicación abusiva de la misma, camino por el que unos y otros ignoran o atropellan abiertamente los derechos básicos o fundamentales de la persona humana, reconocidos y garantizados constitucionalmente.

Se olvida conscientemente por aquellas autoridades públicas, que la República fue reconstituida como un Estado Social de Derecho, fundado entre otros valores sobre el respeto de la dignidad humana y el trabajo, siendo a partir del acatamiento y garantía de esos y de los demás valores supremos, que adquieren dimensión y sentido los derechos de la persona y el funcionamiento de la administración pública.

Precisamente se erige como objetivo ético de naturaleza proteccionista y solidaria del Estado Social de Derecho, garantizar la efectividad de los principios y derechos de consagración constitucional, para el mantenimiento de un orden justo, finalidad desprovista de retórica, a la que están constituidas las autoridades públicas.

Por ello, bajo la consideración que se quiera, en todas las actuaciones o manifestaciones de los órganos o agentes estatales, primarán siempre los derechos inalienables e insoslayables de la persona humana, inherentes o intrínsecos al sujeto y por lo mismo inajenables, intransferibles e irrenunciables,

especial carácter del que participan los derechos que derivan directa o indirectamente de la relación de trabajo o de la vinculación legal o reglamentaria, lo que nos lleva a afirmar **que la negativa a una pensión de jubilación, como ejemplo que viene al caso, es actitud funcional que comporta siempre lesión evidente o manifiesta al orden constitucional y legal, por acción o por omisión del agente estatal responsable.**

Y qué decir del derecho fundamental a la igualdad real y efectiva de las personas, el más fundamental de los derechos en cuanto toca con la dignidad misma del ser humano y con su más innato sentido de justicia, consagrado en el artículo 13 de la Carta Política, consustancial al criterio de desarrollo armónico en paz y con equidad que vislumbró el constituyente de 1991, pero que tan fácilmente se conculca por las autoridades públicas, siendo frecuente encontrar, por ejemplo en materia de pensiones, que es el tema que nos interesa, tratamientos abiertamente desiguales y discriminatorios para un jubilado de frente a otros ubicados dentro de los mismos rangos o categorías y en similitud de condiciones fácticas y jurídicas, **al que se le niegan o recortan los derechos que ya le fueron reconocidos y pagados a éstos, como resultado nada más que de la voluntariedad caprichosa y arbitraria del agente estatal responsable, que decide ignorar que la igualdad exige un tratamiento igual para los casos iguales, rompiendo de esa manera, injustificadamente, el equilibrio cuya guarda o conservación se le confió precisamente a él.**

Así mismo el derecho fundamental al debido proceso administrativo, contemplado en el artículo 29 constitucional, se ha vulnerado, cuando la autoridad pública, en este caso **LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** -, de manera caprichosa y arbitraria liquida los derechos pensionales a su cargo, apartándose conscientemente o a sabiendas de los dispositivos legales aplicables al caso, ignorando los principios superiores rectores de la materia y entrando en franca rebeldía contra las directrices que sobre el asunto ha trazado de mucho tiempo atrás la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, para producir finalmente, como corolario de dilatadas tramitaciones, un resultado desfavorable, inconveniente e injusto para el interesado, concretado en una mala o incompleta liquidación de su pensión de jubilación.

La pensión de jubilación, como una prestación inherente, consustancial o derivada del trabajo en todas sus modalidades o manifestaciones, por extensión o afinidad goza de la misma privilegiada protección que por mandato del artículo 25 constitucional se le garantiza a aquel derecho fundamental, protección que encuentra sus parámetros de definición concreta dentro del marco de legalidad que previene el artículo 53 de la Carta Política, cuando señala de manera expresa y suficiente claridad, los principios mínimos fundamentales que regirán las relaciones laborales que surjan del contrato de trabajo o de la vinculación legal o reglamentaria, a las que indefectiblemente deben estarse las autoridades públicas respectivas, en la prevención y

solución de los conflictos de esa naturaleza o que surjan del desenvolvimiento de esas relaciones, desprendiéndose de allí que actos o procedimientos enderezados a conculcar el acceso o el disfrute de la pensión de jubilación en condiciones dignas, justas y móviles, proporcional a la calidad y cantidad del trabajo desempeñado y a la remuneración recibida, liquidada oportunamente con inclusión de todos los componentes salariales que la ley dispone, sin que el interesado tenga que dedicar tiempo, esfuerzos y recursos económicos suplementarios para conseguirla, **como si en lugar de un derecho adquirido persiguiera una dádiva graciosa, soportando esquinces, talanqueras y demoras injustificadas**, constituyen actitud funcional o manifestación de poder o de autoridad reprochable y odiosa, transgresora de principios y garantías mínimas fundamentales en materia laboral, como los de igualdad de trato dentro de parámetros de equidad, proporcionalidad de los derechos y prestaciones, irrenunciabilidad de los beneficios, favorabilidad en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, realidad y prevalencia del derecho sustantivo, garantía privilegiada de la seguridad social, oportunidad y movilidad de la pensión, y respeto por la libertad, la dignidad humana y los derechos del trabajador.

Se vulnera de igual manera en esta ocasión, el artículo 58 constitucional, en cuanto hace relación a la institución jurídica de los derechos adquiridos, que cabe aducir con referencia a los derechos salariales y prestacionales consolidados durante o con ocasión de la relación laboral surgida del contrato de trabajo o de la vinculación legal o reglamentaria, distintos de las meras expectativas que dependen de mantenimiento de una legislación de derecho público a cuya intangibilidad no se puede aspirar. La garantía de los derechos adquiridos protege entonces, lo que se considera ha ingresado al patrimonio titular, como podría predicarse de los sueldos y demás emolumentos periódicos y permanente causados, y también de la pensión de jubilación cuando se ha adquirido el status según los requerimientos y condiciones de ley, y en fin, de todos los derechos que por el ejercicio del empleo hacen parte del patrimonio del trabajador, lo que quiere decir que tal garantía tiene que ver con las situaciones jurídicas particulares consolidadas, pudiendo determinarse en cada caso concreto de cara a un cambio de legislación o a un acto administrativo, revestido de firmeza y ejecutoriedad vigente para el momento en que nació el derecho o por virtud del cual nació ese derecho. Bajo esas consideraciones, mal podrían desconocerse, como en el presente asunto, el reconocimiento de la pensión de vejez, con aplicación de los factores salariales que para una óptima liquidación pensional señala procedentes el régimen legal especial de los servidores de la Rama Judicial del Poder Público, y a los que reiterativamente apunta la jurisprudencia sobre la materia, vigente aquel para el momento en que el derecho a gozar de la misma se causó, comportando un giro ilegal de la función administrativa, la negativa caprichosa o arbitraria de la pensión legal.

Conforme a los motivos que se han expresados, el imperio de la Constitución viene a ser, entonces, la garantía suprema de unas adecuadas relaciones entre los gobernantes y los gobernados, generando derechos y deberes para ambas partes, no obstante lo cual ni los derechos del administrado se agotan en la Constitución, ni ésta por sí solo produce los beneficios ni satisface los intereses que de la administración esperan la sociedad y cada uno de sus componentes, pues, al fin y al cabo, será siempre la disciplina social, la cultura política y administrativa y la firme predisposición al respeto de los derechos ajenos, concebido todo como práctica constante y sincera de un pueblo, lo que en definitiva delinearán la fisonomía de una organización estatal justa y equitativa, siendo posible únicamente así alejar el peligro de los privilegios y de las discriminaciones odiosas, de las actuaciones administrativas desidiosas e injustas, de los abusos o de las extralimitaciones de poder, disfrazado todo de legalidad a través de las aparentes o falsas argumentaciones justificativas, tan comunes a todo nivel del desenvolvimiento nacional.

Ahora bien, en lo que concierne con las normas que se invocan quebrantadas, que en concordancia y armonía con el Decreto 546 de 1971 configuran el régimen legal especial de pensiones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial del Poder Público cobijados por el sistema de transición de la Ley 100 de 1993, se tienen los motivos que a continuación se expresan:

Si examinamos los textos de las Resoluciones No. **GNR-203121 de 05 de JUNIO de 2014, GNR - 268544 de 25 de JULIO de 2014; VPB- 16710 de 24 DE FEBRERO DE 2015; GNR-54415 DE 19 DE FEBRERO DE 2016; GNR-128627 DE 29 DE ABRIL DE 2016 Y VPB-28111 DE 06 DE JULIO DE 2016** acusadas, **LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** -, a efectos del reconocimiento de la pensión mensual vitalicia de jubilación de este peticionario, puso en duda que estuviera amparado por el régimen de transición contemplado en el primer aparte del inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, según el cual, la edad, el tiempo de servicio y el monto de la pensión, se rigen por las leyes anteriores a ese estatuto, leyes especiales más favorables que en el caso concreto corresponden al **Decreto 546 de 1971 y dispositivos en armonía y consonancia que lo complementan.**

Sin embargo, permeando exótica interpretación de la normativa citada, que en aquellos actos administrativos acusados se aduce como fundamento jurídico de las decisiones adoptadas, la entidad demandada termina afirmando que el régimen especial de pensiones de los servidores de la Rama Judicial del Poder Público, opera por virtud del sistema de transición anotado, solo cuando se tiene cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicio a la entrada en vigencia del acto legislativo 01 de 2005 (25 de julio de 2005), fecha para la cual el suscrito solamente contaba con 1233 semanas cotizadas, que no me hacía beneficiario del régimen de transición, si lo cierto del caso es que para la fecha cuando cumplí con los requisitos contemplado en el **Decreto**

546 de marzo 27 de 1971, contaba con 21 años, UN MES Y 26 DÍAS DE SERVICIO A LA RAMA JUDICIAL Y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. .

Con aquel arbitrario criterio de la interpretación de unos dispositivos legales que son claros y expresos en su tenor literal, **LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** - pasa caprichosa y arbitrariamente por encima del sistema de transición contemplado por la Ley 100 de 1993 y del régimen legal especial de pensiones de los servidores de la Rama Judicial del Poder Público consagrado por el Decreto 546 de 1971 y normativa que lo complementa, principalmente en los Decretos 717, 911, 1045 y 1660 de 1978 , y 691 de 1994, artículo 6, modificado por el artículo 1 del Decreto 1158 de la misma anualidad, referidos a los factores salariales a tener en cuenta en la liquidación pensional.

Al desconocer los regímenes de transición y especial de pensiones mencionados, **LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** - incurre igualmente en sistemática insurrección contra la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que converge a confirmar que para los servidores de la Rama Judicial del Poder Público, adscritos al sistema de transición del inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, existe un régimen legal de pensiones especial o de excepción concretado en el **Decreto 546 de 1971 y dispositivos que lo complementan**, que en lo fundamental dispone que la pensión de jubilación para esos funcionarios y empleados es equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicio, en el supuesto que el servicio se haya prestado **por lo menos durante diez años exclusivamente a la Rama Judicial o al Ministerio Público o a ambos.**

Al desconocer la coexistencia y aplicación de ese régimen especial de pensiones a todos los efectos, por esa vía **LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** - también se aleja de principios orientadores generales como los de favorabilidad, de inescindibilidad de las normas, de interpretación simple y constructiva de las mismas y de realidad y prevalencia del derecho sustantivo, a mas de conculcar flagrantemente derechos y garantías fundamentales consagradas en los artículos 6,13, 23, 29, 48, 53 y 58 de la Constitución Política, aventurándose de esa suerte en una verdadera actuación de facto administrativa.

En verdad los regímenes legales especiales no son institutos raros o extraños al orden jurídico nacional, cuando de mucho tiempo atrás existen dirigidos a favorecer las condiciones laborales y prestacionales de unos grupos de trabajadores llamados a soportar cargas o responsabilidades que superan los raseros comunes o que de cara a la supervivencia, al desarrollo y a la armonía del conglomerado tienen una significativa relevancia, como los trabajadores del campo, las fuerzas armadas, los docentes, los servidores judiciales y del

Ministerio Público, para citar apenas unos ejemplos, a quienes constitucional y legalmente se les pretende garantizar niveles de protección y seguridad diferenciados o superiores, que antes que resultar desiguales o discriminatorios, simplemente reflejan políticas sociales de beneficio a grupos del entramado laboral que con su esfuerzo y sacrificio lo han ganado merecidamente.

Al tema, sostiene la jurisprudencia constitucional, que mientras no se desconozcan principios, postulados o disposiciones de rango superior, ni sea el fruto de privilegios injustificados, el legislador goza de las suficientes atribuciones para estructurar regímenes especiales en materia salarial y prestacional, afirmando que el establecimiento de regímenes especiales en materia pensional, como los señalados en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, resultan conformes a la Carta Política, como quiera que el tratamiento diferenciado, lejos de ser odioso, discriminatorio o representar un atentado contra el derecho a la igualdad, favorece a los trabajadores a los que cobija **(Corte Constitucional, sentencias C-161 de 1995, C-129 de 1998 y C-608 de 1999)**.

Antes de que la Ley 100 de 1993 viniera a crear el sistema de Seguridad Social Integral instituido para unificar la normatividad, la planeación y la coordinación de las prestaciones de salud y económicas a la comunidad nacional, ya existían varios regímenes especiales en la materia, como el de pensiones que contemplaba la Ley 22 de 1942, o lo que dejaba por fuera de la regla general la Ley 33 de 1985, o el que previnieron para la Rama Judicial y el Ministerio Público la Ley 16 de 1968 y el Decreto 902 de 1969, que en lo pertinente prescribe:

“Mientras se establece el régimen especial de seguridad social para los funcionarios de la Rama Judicial y del Ministerio Público, prevenido en el numeral 5º del artículo 20 de la Ley 16 de 1968, serán aplicables a ellos las disposiciones del Decreto Extraordinario 3135 de 26 de diciembre de 1968, en cuanto sean compatibles con la situación propia de tales empleados” (Decreto 902, artículo 1), determinándose desde entonces que, la pensión “se liquidará con base en el mayor sueldo devengado en el último año y sin límite de cuantía” (Decreto 902, artículo 4).

Es decir, que por mandato del legislador (**Ley 16 de 1968**) y del ejecutivo nacional (**Decreto 902 de 1969**), se determinó desde esa época que habría un régimen prestacional especial **para los servidores judiciales y del ministerio público, luego extendido para cobijar a los funcionarios de la extinguida Instrucción Criminal.**

Sobrevino entonces el **Decreto 546 de 1971**, mediante el cual se consagró el régimen especial o de excepción vigente **para la Rama Judicial y el**

Ministerio Público, en el que se comprendieron materia relacionadas con remuneraciones, revisión de las mismas, vacaciones, vivienda, auxilio funerario, prestaciones médicas, asistencia por maternidad, riesgos profesionales, aportes, cesantías y pensiones, disponiendo el artículo 1º que, ***“Los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público tendrán derecho a las garantías sociales y económicas en la forma y términos que establece el presente decreto”***. (Negrilla nuestra).

Y respecto del tema pensional, prescribe el **artículo 6º** del citado decreto que: ***“Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto tendrán derecho, al llegar a los cincuenta y cinco años de edad si son hombres o cincuenta si son mujeres, y al cumplir veinte años de servicios continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de este Decreto, de los cuales por lo menos diez lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas”***. (negrilla del suscrito). Mi servicio a la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, superó con creces ese tiempo exigido.

El Decreto 1660 de 1978, reglamentario del 546 de 1971, en su artículo 132 previó en materia pensional idéntica situación a la contemplada en el precitado artículo 6º, repitiendo íntegramente su texto, con el único agregado de hacer **extensivo el derecho a la Direcciones de Instrucción Criminal**.

Y para que no quedara duda alguna sobre el carácter especial o excepcional de la base de liquidación fijada en los dispositivos anteriores, **el artículo 133 del Decreto 1660** citado precisa que, ***“Si el tiempo de servicio exigido en el artículo precedente se hubiere prestado en la Rama Jurisdiccional, en el Ministerio Público o en las Direcciones de Instrucción Criminal, en lapso menor de diez años, la pensión de jubilación se liquidará en la forma ordinaria establecida para los empleados de la Rama Ejecutiva”***.

Con posterioridad a la expedición de la Constitución Política de 1991, se dictó la **Ley 4ª de 1992**, sobre régimen salarial y prestacional de los empleados públicos en general, incluidos los adscritos al Ministerio Público, confirmándose la salvaguarda o protección de los regímenes especiales o de excepción como el contemplado en el **Decreto 546 de 1971**.

Al efecto previno la Ley 4ª en el literal A del artículo 2º, que para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores enumerados en el artículo 1º, el gobierno nacional tendría en cuenta, entre otros objetivos y criterios, el respeto a los derechos adquiridos de los empleados públicos, tanto de régimen general ***“como de los regímenes especiales”*** (negrilla fuera de texto).

La Ley 100 de 1993 no constituye la excepción en la línea normativa que se pone de presente, pues, como se anotó con precedencia, al establecer en el artículo 36 el sistema de transición, mantuvo los regímenes especiales en materia pensional, tendencia que refrenda el artículo 279 del mismo estatuto. Sin lugar a dudas, entonces, el **Decreto 546 de 1971**, que contempla un régimen pensional especial o de excepción para los servidores de la Rama Judicial y del Ministerio Público, no ha sido expresa ni tácitamente derogado por la legislación posterior que regula temas afines en el mismo ámbito de aplicación, manteniendo su vigencia en relación con los funcionarios y empleados cobijados por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, circunstancia de la que enhiestamente se da por desentendida la entidad demandada, bajo el supuesto socarrón de que el mismo opera únicamente en lo que concierne a las semanas cotizadas de 750 para la fecha de entrada en vigencia del acto legislativo 01 de 2005, esto es, el 25 de julio de 2005, régimen que se mantendrá hasta el año 2014.

JURISPRUDENCIA SOBRE EL REGIMEN DE TRANSICION DEL CONSEJO DE ESTADO.

Sobre la interpretación y aplicación del régimen de transición del inciso 2º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se encuentran varias providencias, entre las cuales se destacan las siguientes:

1.- Sentencia 8 de junio de 2000. Expediente 2779. Sección Segunda del Consejo de Estado. C.P. Alejandro Ordoñez Maldonado:

*“El régimen previsto en el inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, relativo a la **edad, tiempo de servicio y monto de la pensión**, ampara a quienes al entrar en vigencia el sistema tuvieran 35 años o más de edad para mujeres o 40 años o más para hombres, o haber cotizado por 15 o más años, hipótesis que se cumplían a cabalidad en el sub-lite, pues a la muerte del causante de derecho pensional señor ALFONSO VELEZ SALAZAR, tenía más de 50 años de edad y había prestado sus servicios por más de 20 años. Es claro entonces que la pensión se regía por la normatividad anterior.*

Se agrega a lo anterior que, son de la esencia del régimen de transición, la edad el tiempo de servicio y el monto de la pensión. Si se altera alguno de esos presupuestos se desconoce dicho beneficio.” (negrilla del suscrito).

2.- Sentencia 21 de septiembre de 2000. Expediente 470-99. Consejo de Estado. C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda:

*“Por manera que si las personas sometidas al régimen de transición deben jubilarse con la **edad, el tiempo de servicio y el monto de la pensión** gobernados por las normas anteriores a la Ley 100, no ve la Sala cuáles son las demás condiciones para acceder al derecho, que según la última regla del inciso 2° en análisis se rigen por dicha ley” (resaltado fuera de texto).*

3.- Sentencia de noviembre 21 de 2002. Radicación No. 25000-23-25-000-1998-8045-01 (2147-01). Sección Segunda Subsección “B”. C.P. Dr. Tarsicio Cáceres Toro.

(...)

“Es de agregar que existieron normas que mantuvieron la vigencia del régimen especial, antes de expedirse la ley 100 de 1993:

La ley 33 de 1985 reguló el tema de las pensiones de los empleados oficiales. Sin embargo, el inciso 2° del artículo 1° estableció:

*No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la ley haya determinado expresamente, **ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones**”. (subrayado fuera de texto).*

*En resumen, para concluir que lo previsto en la Ley 100 de 1993 (que en materia pensional quedó bajo el imperio del régimen legal prestacional anterior en los aspectos relevantes determinados de edad pensional, tiempo de servicio pensional y monto pensional), **en el evento que para el 1° de abril de 1994 no hubiera cumplido "todos" los requisitos pensionales y continuó en servicio después de esa fecha, se tiene que la liquidación y reconocimiento pensional continúan bajo el régimen pensional anterior a que estaba sometido, conforme a los criterios sostenidos por la Jurisdicción**, pues no es posible aceptar que por esa circunstancia (haber cumplido "todos" los requisitos después de la fecha prevista en la ley y continuar en servicio) desaparezca la protección legal pensional conferida y se desnaturalice la "transición" consagrada, **más cuando surge una duda entre la aplicación del régimen anterior pertinente y lo dispuesto en el inc. 3° del art. 36 de la precitada ley, en cuyo evento se debe aplicar la norma más favorable que es la del régimen antiguo relevante conforme al art. 53 de la Carta Política.***

*En efecto, en aplicación del **inciso 3° del art. 36** la pensión se liquidaría al 75% del promedio de los factores computables devengados en el lapso que va de abril 1° de 1994 hasta cuando el servidor cumplió todos los requisitos pensionales, aunque continuara en servicio y pagando aportes; en cambio, al aplicar el **inciso 2° del art. 36** de la Ley 100 de 1993 y el régimen especial anterior (D. L. 546 /71), el valor de la mesada pensional surgiría de aplicar el 75% a la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último*

año de servicio en las actividades citadas, lo cual no solo es diferente sino más favorable al servidor público. Nótese que al tenor del inciso 3º para la liquidación pensional es relevante un término (de abril 1º /94 hasta cuando cumplió los requisitos pensionales), con desconocimiento de los servicios posteriores y retribuciones recibidas durante él, aunque haya aportado para pensión; por el contrario, conforme al inciso 2º y bajo el imperio del D. L. 546 /71 se tiene en cuenta la asignación mensual más elevada devengada durante el último año de servicio, que bien puede ser posterior a la fecha del cumplimiento de los requisitos pensionales. Se recuerda que los incisos 2º y 3º del art. 36 de la Ley 100 de 1993 no son concordantes; por el contrario, tienen redacción contradictoria, como lo destacó el Consejo de Estado en providencia ya citada, lo que permite en el caso de duda, aplicar la norma más favorable por mandato del art. 53 de la Constitución Política.

Y respecto de este personal, sometido al régimen de "transición" pensional de la precitada ley, **en el evento que haya continuado en servicio después de haber cumplido los requisitos pensionales**, se considera que su situación jurídica pensional por esta circunstancia **no queda sometida a lo dispuesto en los arts. 9º de la Ley 71 de 1988 y el 10 del decreto 1160 de 1989**, que regula la "reliquidación pensional" de quienes continuaron en servicio, porque -como ya se dijo anteriormente- la regla legal mencionada no derogó el régimen pensional especial del Decreto Ley 546 de 1971 que contempló un sistema de liquidación y reconocimiento de la prestación, con una base y tiempo que comprendieron tanto el reconocimiento provisional como el definitivo, es decir, permite el reconocimiento pensional estando en servicio y tácitamente también autoriza la liquidación definitiva teniendo en cuenta los nuevos servicios prestados después del cumplimiento de los requisitos pensionales.

Tampoco resultan aplicables las normas reglamentarias de la Ley 100 de 1993 que determinan las bases que se deben tener en cuenta en la liquidación pensional, en caso de personal sometido al régimen de "transición" pensional del art. 36-2 de la Ley 100 de 1993, porque si la prestación periódica se debe **liquidar y reconocer bajo ley especial anterior** en los aspectos de edad pensional – tiempo de servicio pensional **y monto pensional** (que comprende porcentaje y base de la liquidación), que respecto del personal de la Rama Judicial y Ministerio Público está prevista en el D. L. 546 /71 (en el caso de autos), será esta normatividad la aplicable en esa materia, más cuando contempla una regulación especial y diferente. Si se aplicaran las normas ordinarias atinentes al MONTO PENSIONAL previstas en la Ley 100 de 1993 y sus reglamentarios al personal que reclama su reconocimiento pensional definitivo, cuando está sometido al régimen de transición del art. 36-2 de la Ley 100 de 1993, resultaría desvirtuado e inócuo el régimen preferencial "transitorio". Se insiste que, en cuanto al MONTO de la pensión (que comprende el porcentaje y la base pensional) cabe concluir que el citado personal por mandato legal "de la transición" del inciso 2º del art. 36

quedó sometido al régimen especial anterior, por lo que no se aplica el inciso 3º del mismo artículo teniendo en cuenta las consideraciones ya hechas”.

Sentencia 30 de abril de 2003. Sección Segunda. Subsección “B”, Consejo de Estado. C.P. Jesús María Lemos Bustamante.

“(…) “Así las cosas, para acceder a los beneficios al régimen de transición solo se requiere tener la edad o el tiempo de servicios consagrados en la norma, sin que pueda entenderse que existen otros requisitos adicionales a los ya citados”. El requisito de la edad o el tiempo de servicios es alternativo.

Sentencia de unificación del 12 de septiembre de 2014. Sección Segunda Consejo de Estado. C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Expediente No. 25000-23-42-000-2013-00632-01 (1434-2014):

“Régimen de Transición aplicación del Decreto 546 de 1971.

“Ahora bien, en punto a determinar, que Magistrado de Alta Corte es beneficiario del Decreto 546 de 1971, por virtud de la habilitación a regímenes especiales subsistentes de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se debe tomar como parámetros, la satisfacción del requisito de la edad para el 1º de abril de 1994, fecha en la que entró a regir el régimen pensional general.

“De tal suerte, que si el referido Magistrado, tiene afirmado su Status de transición, por cumplir la edad -35 años si es mujer o 40 años si es hombre-, resulta evidente que adquiere el Status pensional, que lo habilita para ser destinatario del régimen especial de la Rama Judicial, de que trata el Decreto 546 de 1971; por lo que lógicamente, su situación no se rige por el régimen general.

Como lo dispone el artículo 6º del Citado Decreto, el derecho al reconocimiento pensional, lo obtiene el funcionario judicial, con el cumplimiento de la edad de 55 años si es hombre, 50 años si es mujer y 20 años de servicios, de los cuales 10 años lo sean al servicio de la Rama Jurisdiccional o del Ministerio Público o en ambas actividades”.

JURISPRUDENCIA REGIMEN TRANSICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.

1.- Sentencia T-631 de agosto 8 de 2002:

“15. En la Ley 100 de 1993 se estableció de manera general el régimen de transición.

El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 estableció una excepción a la aplicación universal del Sistema de Seguridad Social en pensiones. Esa excepción es para quienes el 1º de abril de 1994 hayan tenido 35 años si son mujeres o 40

años si son hombres o 15 años o más de servicios o de tiempo cotizado; a ellos se les aplicará lo establecido en el régimen anterior a la Ley 100, en cuanto al tiempo de servicio, número de semanas cotizadas y el monto de la pensión.

El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 es una norma de orden público, desarrolla el principio de favorabilidad reconocido en el artículo 53 de la Constitución que penetra en todo el ordenamiento laboral por ser su hilo conductor. Además, la Ley 100 artículo 11, también establece el principio de favorabilidad.

Surge un derecho adquirido para acogerse al régimen de transición dijo la Sentencia T-534/01.

“Por otra parte, el respeto de los derechos adquiridos con base en regímenes pensionales anteriores está previsto en el inciso final del artículo 36, el cual establece que quienes a la fecha de vigencia de la ley hubiesen cumplido los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez de acuerdo a normas favorables anteriores, aún cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento, tendrán en desarrollo de los derechos adquiridos, a que se les reconozca y liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad vigentes al momento en que cumplieron tales requisitos.”

2.- Sentencia SU-130 del 13 de marzo de 2013- M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo:

“Conforme con lo anterior, para ser beneficiario o sujeto del régimen de transición pensional y así quedar exento de la aplicación de la Ley 100/93 en lo referente a la edad, el tiempo y el monto de la pensión de vejez, no se requiere cumplir paralelamente el requisito de edad y el tiempo de servicios cotizados, sino tan solo uno de ellos, pues la redacción disyuntiva de la norma así lo sugiere. Cabe precisar que la excepción a dicha regla se refiere al Sector Público en el nivel territorial, respecto del cual la entrada en vigencia del SGP es la que haya determinado el respectivo ente territorial (Ley 100, art. 151)”.

REGIMEN ESPECIAL APLICABLE A SERVIDORES DE LA RAMA Y MINISTERIO PÚBLICO.

Remontándonos a las directrices jurisprudenciales del Consejo de Estado, debemos entender que cuando el **Decreto 546 de 1971** emplea en su artículo 6° la acepción idiomática “**monto**”, no es para significar simplemente el tanto por ciento de una cantidad en abstracto, como si lo importante allí fuera el porcentaje y lo insustancial la cantidad, comprensión equivocada y estrecha que está bien lejos de aproximarse siquiera a la idea que sugiere dicha expresión de ser el resultado de la suma de varias partidas, correspondiendo en realidad ese vocablo al concepto jurídico de liquidación aritmética del derecho, que se realiza fundamentalmente con la suma de todos los factores que legalmente deben tenerse en cuenta en la determinación de la asignación mensual más elevada del último año de servicio, producto sobre el que se

aplica el 75% y cuya equivalencia corresponde, ahora sí, al monto líquido, en concreto, de la mesada pensional (sentencia de 15 de noviembre de 2001).

De vista a lo anterior, siguiendo siempre los derroteros jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, procede ahora definir lo que debe entenderse como asignación mensual, para efectos de la liquidación del monto de la mesada pensional.

Aquellas altas Corporaciones, de mucho tiempo atrás, han venido sosteniendo que por asignación mensual debe entenderse no solo la remuneración básica mensual, sino todo lo que el servidor público percibe por concepto de salario, esto es, todo lo que devengue en forma habitual o periódica a cualquier título y que implique retribución ordinaria y permanente de sus servicios, sea cual fuere la designación que se le dé, conforme se deduce de lo prescrito en los artículos **2º de la Ley 65 de 1946, 2º de la Ley 5ª de 1969**, y aún de la definición que trae el **artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo**, porque donde hay identidad de razón debe existir identidad de derecho.

En consecuencia, primas como las de servicio, de navidad y de vacaciones, constituyen sin hesitación alguna remuneración y, por tanto, en tal carácter, son factores computables para la determinación del ingreso base de una adecuada, justa y legal liquidación en concreto del monto de la mesada pensional de los servidores judiciales.

Sobre ese aspecto, el Consejo de Estado apunta a señalar, que el artículo **12 del Decreto 717 de 1978**, tal como fue modificado por el **artículo 4º del Decreto 911** de la misma anualidad, indica apenas algunos factores de remuneración para los servidores judiciales y del Ministerio Público, pero que establece como principio general que además de la asignación básica mensual fijada por la ley para cada empleo, también constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el funcionario o empleado como retribución de sus servicios, de suerte y manera que los componentes allí señalados no pueden tomarse como una relación taxativa, pues que de hacerse así quedaría sin significación el principio general mencionado (**Sentencias de 28 de Octubre de 1993, 11 de octubre de 1994, 14 de noviembre de 1996, 8 de junio de 2000 y 10 de octubre de 2002**).

Se exhorta en las mismas sentencias, sobre el deber funcional de aplicación preferente de los regímenes especiales o de excepción, frente a los que tienen carácter general, observación que encuentra su razón de ser en el principio de jerarquización de las normas jurídicas contemplado en el **artículo 5º de la Ley 57 de 1887**.

Y en **concepto de 26 de marzo de 1992** rendido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, se anota que en tratándose de las pensiones de los servidores públicos, se debe tener especial cuidado que su liquidación se efectúe con fundamento en la remuneración, y no en los aportes, que es lo que precisamente hace **LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** -, en contravía de la legalidad, cuando para concretar el monto de aquella prestación, acude no a los componentes de la

asignación mensual que se deducen del cabal entendimiento de los Decretos **717 y 911 de 1978**, sino a los factores que sirven de base de cotización al Sistema General de Pensiones, relacionados taxativamente en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994.

De suma importancia resulta reseñar que el **Decreto 1045 de 1978**, que en armonía con el **Decreto 1042 del mismo año** fija las reglas para la aplicación de las normas sobre remuneración y prestaciones sociales de los empleados públicos del sector nacional, invocado en la jurisprudencia traída del Consejo de Estado, en su artículo 45 señala los factores que deben tenerse en cuenta para la concreción del monto de la mesada pensional de aquellos servidores, relacionando entre esas partidas **la asignación básica mensual, la bonificación por servicios prestados y las primas de servicio, de navidad y de vacaciones**, línea que mantiene y que inclusive amplía la legislación posterior sobre la materia, no siendo lógico, ni jurídico, ni justo, que como consecuencia de la aplicación de criterios de interpretación restrictivos y desfavorables en asunto salarial y prestacional, opuestos a los principios y postulados constitucionales que inspiran el orden jurídico-laboral común y público, se deje por fuera de esa regla general a los funcionarios y empleados del sector judicial y del Ministerio Público, menos cuando la ley de manera explícita no los ha excluido.

En fin, queda claro así, que el monto porcentual o en abstracto de la pensión de jubilación en el régimen especial de los servidores judiciales y del Ministerio Público amparados por el sistema de transición precavido por **el artículo 36 de la Ley 100 de 1993**, es el 75% del ingreso mensual más alto devengado en el último año de servicio, como lo estipula el **artículo 6º del Decreto 546 de 1871**, pero la remuneración mensual con todos y cada uno de sus componentes, no la base de cotización al sistema general de pensiones, es el elemento informante esencial para la concreción o realización material del derecho, a través de la cuantificación aritmética del monto pensional.

Esa remuneración mensual, también quedó claro, equivale a todo lo devengado como consecuencia directa o indirecta de la relación de servicio, comprendidos allí **los sueldos, primas, bonificaciones y demás emolumentos percibidos con causa o por razón del empleo**, a menos que se trate, por supuesto, de un factor expresamente excluido por disposición legal.

Las primas de servicio, de navidad y de vacaciones, no son una prestación económica y tampoco un beneficio ocasional, esporádico o excepcional, **sino fundamentalmente un incremento remuneratorio**, y como tal hacen parte de la asignación habitual, periódica y permanente de los servidores de la Rama Judicial y del Ministerio Público, sin duda computable para efectos pensionales, así no lo quiera admitir **LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES --**, en actitud funcional que sabe que va en contravía de los principios y postulados de orden constitucional que inspiran el orden jurídico-laboral común y público, que conculca toda una gama de derechos mínimos fundamentales, que está en desconexión absoluta con el ordenamiento legal, y que comporta una sistemática rebeldía contra las directrices jurisprudenciales sobre la materia, como si pudiera graciosa e

impunemente disponer a su arbitrio, que aquello que esencialmente es remuneración deje de serlo.

El H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda –Subsección “A”, con ponencia del Consejero Doctor ALBERTO ARANGO MONTILLA, al desatar un recurso de apelación interpuesto por la Caja Nacional de Previsión Social, contra la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del Valle, en donde se ordenó la reliquidación de una pensión de jubilación teniendo en cuenta todos los factores salariales, fallo así: “**CUARTO: Condenase a la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL a reliquidar y pagar a favor de la demandante FANNY SALAZAR PEREA la pensión de jubilación teniendo en cuenta como factores salariales además de la asignación básica mensual, la bonificación por servicios prestados y los incrementos por antigüedad, las doceavas partes de la prima de navidad, de servicios y de vacaciones, y el subsidio de alimentación devengados..**” (negrilla nuestro).

Y con posterioridad la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en **sentencia de Unificación del 4 de agosto de 2010** señaló que en aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades, progresividad y favorabilidad en materia laboral, debía incluirse en la base de liquidación de la pensión, la totalidad de lo devengado por el empleado por concepto de salario. (Expediente: 2006-7509. C.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila).

CASO CONCRETO:

Para mi caso concreto, de acuerdo con mi historia laboral, se precisa que laboré **VEINTIÚN AÑOS, UN MES Y VEINTISEIS DIAS** al servicio de La Rama Judicial del Poder Público, pues mi vinculación operó el 05 de septiembre de 1973, hasta el 30 de octubre de 1994, que ocupé varios cargos en la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, como empleado y funcionario público, además del tiempo servido en la Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga.

Está probado, igualmente, que con ocasión de mi nacimiento el 16 de noviembre de 1954, para el 1º de abril de 1994, fecha en que entró en vigor la Ley 100 de 1993, **afirmé mi STATUS de transición**, pues si bien, solamente contaba con 39 años, 7 meses y 15 días de edad; bien no es, menos vierto, que para dicha fecha, tenía 20 años, 6 meses y 25 días de servicio continuo en la Rama Judicial, situación que me habilita como destinatario del **Decreto 546 de 1971**, pues era éste al que me encontraba afiliado para la fecha en que entró a regir la Ley 100 de 1993, que en el artículo 6º exige para el reconocimiento de la pensión, **el cumplimiento de 55 años de edad y de 20 años de servicio continuo o discontinuo**, de los cuales por lo menos 10 años lo hayan sido exclusivamente al servicio de la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público o en ambas actividades, así contaba con la expectativa

legítima de pensionarme, según lo dispuesto en el citado Decreto, expectativa que una vez cumplidos los requisitos exigidos por dicha norma para acceder a la pensión, devino en un derecho laboral adquirido, cuyo desconocimiento contraviene la Constitución y la Ley, como así lo ha expuesto **la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-430 de 1998**. Y está comprobado, que cumplí más de 20 años al servicio de la Rama Judicial del poder Público y Fiscalía General de la Nación a Nación y a la fecha de la demanda, supero los 55 años de edad.

Mi derecho pensional se consolidó **desde el 16 de noviembre de 2009**, al cumplir 55 años de edad, y más de 20 años de servicio a la Rama Judicial del Poder Público y Fiscalía General de la Nación.

En conclusión, **A LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES-**, no le era viable desconocer en mi caso, que me encuentro dentro de los supuestos de hecho y de derecho previstos en el **artículo 6º del Decreto 546 de 1971**, para acceder como empleado y funcionario de la Rama Judicial, a la pensión mensual vitalicia de jubilación, por lo tanto, no puede esa entidad aducir razón lógica ni jurídica alguna, que le impidiera o ahora le impida entrar a reconocer la pensión de jubilación que legalmente me corresponde, dando cabal aplicación al dispositivo legal mencionado, en armonía y concordancia con **los Decretos 717, 911, 1042, 1045 y 1660 de 1978, 247 de 1997 y las Leyes 4ª. De 1992, 100 de 1993 y 332 de 1996**, que contemplan el régimen pensional especial que me cobija, concretando, en consecuencia, el monto de la prestación reconocida, en la cuantía justa y legal, determinada sobre el equivalente del 75% de la asignación mensual más elevada percibida en el último año de servicio, con inclusión de todos los factores de remuneración que lo conforman, que al caso son **el sueldo básico mensual, la bonificación por servicios prestados y las doceavas partes de las primas de servicio, de navidad y de vacaciones**, como así le reitero comedidamente al señor Juez que lo disponga en la parte resolutive del fallo, a título de restablecimiento del derecho, conforme el petitum de la demanda, para su obedecimiento por parte de **LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES -**, como consecuencia necesaria de la declaratoria de nulidad impetrada, respecto de los actos administrativos que con toda precisión se individualizaron.

La nulidad incoada respecto de aquellas resoluciones, tiene su razón jurídica de ser, en la actuación funcional manifiestamente ilegal, en cuanto a su objeto, que se predica de **LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES -**, consistente en que el contenido mismo de esos actos administrativos, resulta abiertamente opuesto o en contradicción con los principios y postulados constitucionales que inspiran la buena gestión administrativa, que instituyen y garantizan unos derechos mínimos fundamentales y que enmarcan el orden laboral y de seguridad social; igualmente infringe de manera grosera las normas positivas que instituyen y gobiernan el régimen pensional especial o de excepción de los servidores judiciales y del Ministerio Público, y del mismo modo, con la desmesura que

infunden la soberbia y la prepotencia, se aparta rebeldemente de los criterios jurisprudenciales que con uniformidad y exactitud iluminan el entendimiento y aplicación razonable del ordenamiento constitucional y legal a efectos de una seguridad jurídica materialmente justa.

La causal de nulidad alegada, que la doctrina y la jurisprudencia especializada denominan de ilegalidad objetiva y que en el fondo equivale a la vía de hecho administrativa, de cara a las resoluciones acusadas por sí sola justifica en este caso el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplada en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, de una parte, para la restauración del orden jurídico transgredido, cuyo respeto y acatamiento se impone a la autoridad pública como condición de fondo de sus actuaciones y dentro de la idea de satisfacer el interés general o público, y de otra parte, para la necesaria reparación en concreto del agravio injustificado causado a los derechos subjetivos de la interesada.

Hasta allí el concepto de violación de las normas constitucionales y legales que se invocan como transgredidas, y los fundamentos de derecho en los que se afianzan las pretensiones de la demanda.

ESTIMACION RAZONADA DE LA CUANTIA:

De acuerdo al certificado de sueldos y prestaciones percibidos por el suscrito en el año 1994, año en que se consolidó el derecho pensional, de servicios a la Rama Judicial y el salario percibido como Jefe de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía municipal de Guadalajara de Buga, , los valores más altos son: sueldo básico \$2.138.098,00, tal como lo liquidó COLPENSIONES, acoguéndome a la condición más beneficiosa y el valor proporcional o DOCEAVAS PARTES de la bonificación por servicios prestados \$ 107.396.83; de la prima de navidad \$ 342.630.58; Prima de servicios \$ 157.898.91; Prima de vacaciones \$ 328.571.41, valores que son base para la liquidación de la pensión de manera que al aplicarse el 75% a la suma de todos estos rubros, me quedaría una pensión mensual de \$ 2.048.973.863,00 M/Cte., a partir del 16 de noviembre de 2009, obviamente reajustándose anualmente tal como lo ordena la ley.

Hechas las operaciones matemáticas correspondientes y teniendo en cuenta el índice de inflación de cada año, la cuantía no supera los cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales, por lo tanto se trata de un proceso de primera instancia.

PRUEBAS QUE SE APORTAN:

1.- Fotocopias de los actos administrativos contenidos en las Resoluciones No. **GNR-203121 del 05 de JUNIO de 2014**, por la cual se me niega la pensión de vejez ; **GNR-268544 de 25 JULIO de 2014** por la cual se resuelve un recurso de reposición en contra de la anterior Resolución GNR-203121 DE 05 DE JUNIO DE 2014, confirmando; **VPB-16710 de 24 de FEBRERO DE 2015**, que resuelve un recurso de apelación en contra de la resolución gnr-203121 de 05 de junio de 2014 en el sentido de confirmar el acto apelado; Resolución **GNR-54415 DE 19 DE FEBRERO DE 2016**, RELIQUIDANDO mi pensión; RESOLUCIÓN NRO. **128627 DE 29 DE ABRIL DE 2016**, confirmando la Resolución Nro. GNR-54415 DE 19 de febrero de 2016; RESOLUCIÓN NRO. **VPB-28111 DE 06 DE JULIO DE 2016**, confirmando la Resolución Nro. GNR-54415 de 19 de febrero de 2016, expedidos por **LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES -**.

2.- Fotocopia de la Información laboral, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa.

3.- Fotocopia de la Información laboral, expedida por la Fiscalía General de la Nación.

4.- Información laboral expedida por la Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga.

5.- Fotocopia de mi cédula de ciudadanía y tarjeta profesional de abogado.

PRUEBAS QUE SE SOLICITAN

Solicitar a **LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES -**, en Bogotá, copia auténtica de todos los documentos que obran en mi carpeta, desde el momento en que solicité el pago de mi pensión por vejez.

NOTIFICACIONES

Las del Director o Gerente y demás funcionarios de **LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES -** o quien haga sus veces en la Carrera 10 No. 72-33 Torre B, Piso 11, en Bogotá D.C.

Las del suscrito en la secretaría del juzgado o en la calle 8 No. 13-53, apto. 208 de Guadalajara de Buga. Teléfono 318-696-59-59.- (2) 238-25-32.

Correo Electrónico: jarsa.54@hotmail.com.

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO:

Procesos@defensajuridica.gov.co
cobuzonjudicial@defensajuridica.gov.co
[o](#)

COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO

La tiene el Juzgado Administrativo de Guadalajara de Buga (Reparto), por razón de uno de los lugares donde laboré. El procedimiento es el ordinario.

ANEXOS:

Las pruebas que se enuncian en el acápite “Pruebas que se aportan”, fotocopia de la demanda con sus anexos para la Secretaría del Despacho y para traslado a: COLPENSIONES en Bogotá y Ministerio Público en Guadalajara de Buga.

CD en formato PDF con el conteniendo esta demanda.

Ruego a usted señor Juez, darle el trámite legal al presente escrito.

Con el respeto de usanza,

JAIRO HERNEY ARANA SAAVEDRA.
C.C. No. 14.875.487 de Buga
T.P. No. 39.869 del C.S.J.